

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En autos RIT O-36-2022, RUC 2240041380-3, del Primer Juzgado de Letras de San Carlos, caratulados “Luco Sepúlveda Jaime con Municipalidad San Fabián de Alico”, por sentencia de tres de febrero de dos mil veintitrés, se acogió la demanda declarativa de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones, y se rechazó la sanción de nulidad del despido.

La demandada dedujo recurso de nulidad y una sala de la Corte de Apelaciones de Chillán, por resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, lo rechazó.

En relación a esta última decisión, la demandada interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que esta Corte lo acoja y dicte la de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las diversas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual se solicita unificar la jurisprudencia consiste en “determinar la obligación de la Municipalidad de pagar las cotizaciones previsionales y de salud respecto del demandante, con quien existió vinculación en base a contratos de honorarios a través de los cuales, el demandante se obligó al pago de las mismas, y que es calificada como relación laboral a raíz de una sentencia”.

Reprocha que la decisión se apartara de la doctrina sostenida en las que acompaña para efectos de su cotejo, dictadas por la Corte de Apelaciones de Chillán en el ingreso rol N° 25-2022, y por esta Corte en los autos Rol N° 30.171-2020, N°1.597-2020, N° 119.187-2020 y N° 98.552-2022.

En la primera, estimó que no resultaba procedente condenar a la municipalidad al pago de las cotizaciones de seguridad social, ya que se estableció una cláusula en el contrato de trabajo que obligó a los demandantes a



enterarlas en los organismos pertinentes, en concordancia con lo establecido en el Título IV de la Ley 20.255 y en la Ley 20.894.

En la segunda, luego de declarar la relación laboral entre el actor y el Fisco, desestimó el pago de cotizaciones de seguridad social por encontrarse establecido que el actor las pagó directamente a los organismos previsionales y de salud a los que se encontraba afiliado.

En la tercera y cuarta, luego de declarar la relación laboral entre las partes, rechazó conceder el pago de las cotizaciones de seguridad social reclamadas, ya que se estableció que los demandantes se obligaron a enterarlas en los organismos pertinentes, en concordancia con lo establecido en el Título IV de la Ley 20.255 y en la Ley 20.894.

Y, en la última, en torno al pago de las cotizaciones de seguridad social, estimó que, si bien al empleador le asiste el deber de pagar las cotizaciones de salud durante la vigencia del contrato, la situación varía una vez concluido, ya que el actor no podrá acceder en forma retroactiva a las prestaciones de salud, por lo que solo se podrían restituírseles las sumas que haya enterado directamente en el organismo de salud. En cuanto a las cotizaciones previsionales y de cesantía, efectuó una distinción, y se obligó a pagar al demandado las cotizaciones desde el 31 de junio de 2017 al 27 de febrero de 2018, en tanto que, respecto del período desde el 28 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, se eximió de su pago, ya que se estipuló en los contratos la obligación del actor de enterarlas directamente en los organismos pertinentes, en concordancia con lo establecido en el Título IV de la Ley N° 20.255.

Tercero: Que la sentencia impugnada, en lo que interesa, rechazó el recurso de nulidad promovido por la parte demandada sobre la base de la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con el Título IV de la Ley N° 20.255.

En sustento de lo resuelto, consideró lo señalado reiteradamente por la jurisprudencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, en que se desprende que las cotizaciones de seguridad social constituyen un gravamen obligatorio que afecta a las remuneraciones que perciben los trabajadores, que el empleador debe descontar y enterar en las respectivas administradoras de fondos.

Por otra parte, al poseer una naturaleza declarativa la sentencia que reconoce una situación fáctica preexistente, que amerita ser tratada de conformidad a las disposiciones que afectan a los trabajadores subordinados y dependientes, no teniendo aplicación las normas invocadas por la parte recurrente



referentes a los “trabajadores independientes”, toda vez que se ha reconocido la existencia de relación laboral entre las partes.

Luego, sostuvo que la sentencia impugnada ordena pagar a la demandada las cotizaciones previsionales y de salud del actor por todo el período de la relación laboral, entre el 8 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2022, por lo que no resulta ajustado a derecho, que, por medio de la causal impetrada, se pretenda alterar los hechos fijados en el fallo recurrido.

Cuarto: Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto en las sentencias invocadas por el recurrente con lo decidido en la que se impugna, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

Quinto: Que para resolver se debe tener presente que esta Corte se ha pronunciado profusamente sobre la materia y que la premisa general que se ha asumido invariablemente, expresada, entre otras, en las sentencias dictadas en las causas ingreso N° 14.137-2019, 18.540-2019, 19.116-2019, 29.471-2019, 28.932-2019 y 24.589-2020, es la que sostiene que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo, *“El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...”*. Agregando que dicho descuento que afecta las remuneraciones de los trabajadores tiene el carácter de obligatorio, conforme lo regula el artículo 17 del Decreto Ley N° 3.500, que expresa: *“Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...”*, deber que se ve reforzado por el tenor expreso del artículo 19 de dicho estatuto que previene: *“Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador (...) en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...”*. Su inciso segundo añade que *“Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...”*.

Por lo que se ha concluido que nuestro ordenamiento considera que el entero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales, corresponde a una carga que le compete al empleador, mediante



descuento que debe ejercer de sus remuneraciones, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que fija la ley; y que la naturaleza imponible de los haberes es determinada por la ley, de modo que es una obligación inexcusable del empleador, atendida la naturaleza de las remuneraciones, realizar las deducciones pertinentes y efectuar su posterior e íntegro entero en los organismos previsionales respectivos desde que se comenzaron a pagar las remuneraciones, postura reafirmada por el artículo 3°, inciso segundo, de la Ley N° 17.322, que establece que *“Se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores. Si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden”*.

Presunción, esta última, a cuyos efectos no resulta relevante distinguir si la existencia de la relación laboral formó parte de lo discutido en el juicio y, por consiguiente, fue declarada en la decisión que se impugna, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia laboral, que esta Corte también ha reconocido en forma invariable, como se advierte de las sentencias pronunciadas en los antecedentes N° 6.604-2014, 9.690-2015, 40.560-2016, 76.274-2016 y 3.618-2017, entre otras, en los que se ha expresado que el pronunciamiento judicial sólo constata una situación preexistente, de manera que la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, sea que se les haya dado esa u otra denominación.

Sexto: Que, por otra parte, sin perjuicio que la legislación impone al empleador el entero de las cotizaciones de seguridad social, previo descuento al trabajador, asignándole el rol de agente retenedor, lo cierto es que cuando el trabajador paga directamente sus cotizaciones en las instituciones pertinentes, sea porque así lo ha decidido en forma voluntaria o porque lo ha acordado con su empleador, incorporando una cláusula en tal sentido en el contrato a honorarios mediante el cual se formalizó la contratación en su origen, se trata de una conducta a la que debe darse valor, pues beneficia su situación previsional, permitiéndole acceder a prestaciones de salud y/o cesantía, e incrementar los fondos con que financiará su futura pensión.

En ambos casos, esto es, pago voluntario de las cotizaciones por parte del trabajador o existencia de una cláusula en el contrato que así lo disponga, este tribunal se ha pronunciado previamente reconociendo los efectos jurídicos de tales acciones, al entender que por su intermedio se cumple la finalidad perseguida por



la norma, en cuanto a que el trabajador pueda acceder efectivamente a las prestaciones que le garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 18.

En efecto, tratándose del primero, a partir de la sentencia dictada en causa rol N° 35.653-2021, seguida de las emitidas en los ingresos 41.026-2021, 98.552-2022 y 106.732-2023, entre otras, se ha sostenido sin variación la improcedencia de condenar al pago de las cotizaciones de seguridad social cuando el trabajador las ha enterado directamente ante los organismos respectivos. Para ello se ha considerado que el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo, también puede ser alcanzado cuando es el trabajador quien paga directamente sus cotizaciones de seguridad social ante los organismos administradores, evitando la existencia de las denominadas “lagunas” en su cuenta de capitalización individual y habilitándolo para acceder a los beneficios que financian, por lo que no hay un daño previsional que reparar, lo que torna en improcedente ordenar un doble pago de la prestación que se trata, de manera que sólo procedería la condena cuando las referidas cotizaciones no hayan sido previamente enteradas y sólo en la parte que se adeude.

En el segundo caso, esto es, cuando el trabajador asumió el entero directo del pago mediante una cláusula incorporada en el contrato de honorarios respectivo, sea que haya cumplido con la obligación o no, se ha decidido lo mismo, lo que aparece como una consecuencia de lo razonado a propósito de la aplicación de la sanción de la nulidad del despido a este tipo de casos, dado el origen de la contratación y la presunción de legalidad que lo amparó, lo que permite dar valor también a este tipo de cláusulas que no serían procedentes en un contrato de trabajo ordinario, nacido a partir del acuerdo de voluntades de las partes que aceptan obligarse en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo. En la sentencia dictada en causa rol N° 98.552-2022 se declaró que si el actor se obligó a enterar directamente las cotizaciones en los organismos pertinentes, cualquier deuda que pueda existir y perjuicios que de ello se deriven serán consecuencia de su propio incumplimiento, por lo que no hay un daño previsional que pueda ser imputado al demandado, lo que torna en improcedente la condena a solucionarlos.

Esta última hipótesis, con la sola excepción de las cotizaciones destinadas a financiar el seguro de cesantía establecido por la Ley N°19.728, pues el pacto cuyos efectos jurídicos se reconocen, supone que el trabajador, formalmente denominado prestador de servicios durante la vigencia del vínculo, debió asumir directamente el pago de sus cotizaciones de seguridad social en conformidad a lo dispuesto por la Ley N°20.055, que, sin perjuicio de su entrada en vigencia diferida



en este punto, modificó el Decreto Ley N°3.500, de 1980, entre otros cuerpos legales, e hizo obligatorio para los independientes el pago de una serie de cotizaciones de seguridad social, en particular, las destinadas a financiar los sistemas previsionales, de salud común (Isapre y Fonasa) y de salud profesional, pero, no consideró las del seguro de cesantía; las que, en consecuencia, nunca se entendieron incorporadas en los pactos de esta naturaleza, por lo que, una vez esclarecida la naturaleza del contrato, deben ser solucionadas por el empleador en los términos que más adelante se indicará.

Séptimo: Que, en conformidad a lo previamente expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en origen por la presunción de legalidad y en que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial.

En consecuencia, de no existir tal cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de las cotizaciones no haya sido totalmente solucionado por el trabajador, deberá ser cumplido por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y la Ley N° 17.322 imponen al empleador que paga fuera del plazo que la normativa establece, pues de acuerdo a los incisos séptimo, décimo y undécimo del artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y a los artículos 21 y 22 a) de la Ley N° 17.322, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal que establecen.

Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la tantas veces mencionada presunción de legalidad, debe concluirse que no puede tenerseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con



la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador, amparado por la referida presunción, deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N° 17.322, y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N° 3.500 y en la Ley N° 17.322, pues considerando lo dicho se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

Octavo: Que, por último, en materia de cotizaciones de seguro de cesantía debe efectuarse una prevención adicional, dado que su financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en cuanto a previsión y salud, es tripartito, conformándose por aportes del trabajador, del empleador y del Estado. Tratándose de dependientes con contrato de trabajo indefinido, como ocurre en el caso, la contribución al seguro, según lo prevé el artículo 5 de la Ley N° 19.728, se divide en un 0,6% de las remuneraciones imponibles de cargo del trabajador, un 2,4% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y un aporte del Estado que corresponde a un monto global que se entera anualmente.

Entonces, sobre la base de lo dicho, en el caso del trabajador que no registra pago de estas cotizaciones durante la vigencia del contrato, sea efectuado por él o por su empleador, se declarará que éste debe solucionarlas, incluyendo tanto el porcentaje que es de su cargo como aquel que debió descontar oportunamente de la remuneración del trabajador, dado que, como se ha razonado a partir de la sentencia dictada en causa Rol 5.516-2023, la legislación obliga que ambas fracciones de la cotización sean solucionadas durante la vigencia de la relación laboral, lo que, en la especie, no fue cumplido. Por otra parte, de ordenarse el cumplimiento parcial de la obligación, limitado únicamente al porcentaje financiado por el empleador, se estarían perjudicando las futuras prestaciones a las que el trabajador pueda acceder con cargo a estos pagos.

Noveno: Que los razonamientos previos deben ser contrastados con los hechos asentados por la sentencia impugnada, que estableció que la relación laboral se desarrolló entre el 8 de agosto de 2018 y 30 de junio de 2022, y que durante todo ese período los contratos de prestación de servicios a honorarios, a través de los cuales se formalizó el vínculo, incluyen una cláusula que indica “se deja constancia, que es responsabilidad del prestador de servicio, la aplicabilidad



de la Ley N° 20.255, respecto al cumplimiento y pagos obligados a realizar por concepto de cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y salud”.

Décimo: Que, por consiguiente, estando la totalidad del período servido por la referida cláusula, procede desestimar el pago de las cotizaciones previsionales y de salud, dada la obligación asumida por el demandante, y disponer el entero de las correspondientes a seguro cesantía, equivalente al 3% de la remuneración imponible, con las limitaciones señaladas respecto de intereses, reajustes y costas.

Undécimo: Que, en tales circunstancias, yerra la Corte de Apelaciones de Chillán cuando rechaza el recurso de nulidad y mantiene la sentencia del grado, que ordenó pagar las cotizaciones de seguridad social devengadas durante toda la vigencia del contrato, sin considerar que se trata de una relación laboral que en su origen estuvo amparada por las normas contempladas en el Estatuto Administrativo y que el demandante asumió una obligación en la materia.

En efecto, sobre la premisa de lo que se ha venido razonando, la referida sentencia debió rechazar la demanda en lo que atañe al cobro de prestaciones de seguridad social previsionales y de salud, por lo que no cabe sino acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada, invalidando, en lo pertinente, la sentencia impugnada y procediendo a dictar, acto seguido y en forma separada, el correspondiente dictamen de reemplazo.

Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge**, el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada, respecto de la sentencia de once de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la decisión de tres de febrero de dos mil veintitrés, emanada del Primer Juzgado de Letras de San Carlos y, en su lugar, se declara que es **nula parcialmente**, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.

Se **previene** que la ministra **señora Chevesich y la abogada señora Rojas concurren a la decisión, teniendo en consideración que se sustenta** en una postura que ya se encuentra uniformada por esta Corte, en los términos señalados en la sentencia impugnada .

Asimismo, la ministra **señora Gajardo** previene que la decisión de acoger el recurso en la referida materia debió conducir a limitar la condena al pago de la cotización de seguro de cesantía a pagar al equivalente al 2,4% de la remuneración imponible cargo del empleador, como había sido previamente



resuelto por esta Corte, por compartir los argumentos que estiman que de ordenarse su pago también en la parte que la legislación ha puesto de cargo del trabajador se configuraría un pago doble, gravando en forma desmedida y desigual al ente público.

Regístrese.

Rol N° 104.849-2023.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., María Cristina Gajardo H., ministra suplente señora Eliana Quezada M., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la ministra suplente señora Quezada y la abogada integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente la segunda. Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ
MINISTRA
Fecha: 04/10/2024 15:55:46

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 04/10/2024 15:38:44

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 04/10/2024 15:55:46



En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

Vistos:

Se reproduce la decisión de única instancia.

Asimismo, se dan por reproducidos los considerandos quinto a undécimo de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que es un hecho acreditado que el demandante prestó servicios en favor de la demandada, bajo subordinación y dependencia, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, entre el 8 de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2022, cuando fue despedido sin cumplimiento de las formalidades previstas por el artículo 162 del Código del Trabajo.

Segundo: Que las partes suscribieron una serie de contratos de prestación de servicios a honorarios, en los cuales se incluyó una cláusula que indica “*se deja constancia, que es responsabilidad del prestador de servicio, la aplicabilidad de la Ley N° 20.255, respecto al cumplimiento y pagos obligados a realizar por concepto de cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y salud*”; por lo que la obligación del empleador debe entenderse limitada únicamente al pago de las cotizaciones de seguro de cesantía equivalente al 3% de la remuneración imponible, con los reajustes e intereses que se precisará.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 7, 8, 63, 67, 162, 168, 446 y siguientes del Código del Trabajo, **resuelve que:**

I.- Se rechazan las excepciones de incompetencia absoluta y prescripción opuestas.

II.- Se acoge la demanda, en cuanto se declara que entre don **Jaime Mauricio Luco Sepúlveda** y la **Municipalidad de San Fabián** existió una relación laboral, desde el 8 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2022, y que el despido de que fue objeto el actor fue injustificado, con una remuneración para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo por \$1.250.000, por lo que se condena a la demandada a pagar los siguientes conceptos:

- a.- \$1.250.000.- por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo;
- b.- \$ 5.000.000.- por concepto de indemnización por años de servicios;
- c.- \$2.500.000.- por concepto de recargo legal del 50%, por aplicación del artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.
- d.- \$1.750.000.- por concepto de feriado legal y proporcional, correspondiente a 42 días.



e.- Cotizaciones por seguro de cesantía devengadas desde el 8 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2022

III.- Se rechaza en lo demás la demanda.

IV.- Las sumas ordenadas pagar lo serán debidamente reajustadas y con los intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda.

V.- Las cotizaciones ordenadas pagar en la letra e) precedente, devengarán los reajustes que ordenan los artículos 11 de la Ley N° 19.728 y 22 de la Ley N°17.322, calculados desde la época y en los términos que tales normas indican, e intereses calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo y únicamente desde la época en que esta sentencia quede ejecutoriada, sin considerar la aplicación de multas.

VI.- Oficiése a AFC, una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

VII.- No se condena en costas a la demandada por no resultar totalmente vencida.

Regístrese y devuélvase.

N° 104.849-2023.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., María Cristina Gajardo H., ministra suplente señora Eliana Quezada M., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la ministra suplente señora Quezada y la abogada integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente la segunda. Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ
MINISTRA
Fecha: 04/10/2024 15:55:47

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 04/10/2024 15:38:45



ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 04/10/2024 15:55:48



En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

